

Mandato de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados

Ref.: AL MEX 5/2024

(por favor, utilice esta referencia en su respuesta)

16 de abril de 2024

Excelencia,

Tengo el honor de dirigirme a Usted en mi calidad de Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, de conformidad con la resolución 53/12 del Consejo de Derechos Humanos.

En este contexto, quisiera señalar a la atención urgente del Gobierno de Su Excelencia la información que he recibido en relación con la **presunta intimidación de jueces y presunta injerencia en la independencia judicial a través de ataques verbales, incluyendo amenazas, que emanan de los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno hacia algunos jueces, señalando oposición a las decisiones que dichos jueces han tomado.**

Según la información recibida:

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, legisladores de su partido "Morena", y la Procuraduría General de la República habrían agredido verbalmente y amenazado a jueces que emiten resoluciones con las cuales estarían aparentemente en desacuerdo.

Antecedentes generales

Reportes indican que desde 2019, el Presidente habría empleado ataques ad hominem en contra de jueces durante sus ruedas de prensa diarias celebradas en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, conocidas informalmente como "La Mañanera".

La Mañanera es un espacio en el que el Presidente se dirige a la ciudadanía para informar sobre diversos temas de la agenda nacional. Cuenta con la participación de altos funcionarios del gobierno como fiscales, secretarios de Estado, diplomáticos y otras figuras gubernamentales que brindan información a la ciudadanía.

Los informes indican que durante La Mañanera, el Presidente habría hecho, en muchas ocasiones, declaraciones alegando que jueces nombrados son "corruptos", que pretende "limpiar" el Poder Judicial Federal por estar supuestamente "podrido", y habría acusado a jueces, magistrados y ministros de tener conflictos de interés y de actuar "bajo intereses criminales, complicidades, cohabitaciones inconfesables, corrupción y despilfarro de recursos", y utilizaría calificativos como "generadores de impunidad" para designar a funcionarios judiciales. Declaraciones similares habrían sido replicadas por funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Por ejemplo, el Subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal habría acusado a varios operadores de justicia, durante La Mañanera, de apoyar a presuntos delincuentes en sus decisiones judiciales como una forma de sabotaje contra la estrategia de seguridad ciudadana del

Gobierno Federal.

En la sección quincenal de la Mañanera, "Jueces que favorecen a delincuentes", las autoridades habrían compartido información sobre jueces y magistrados -normalmente del ámbito federal- que han emitido resoluciones adversas al Ministerio Público en casos presentados por el Ejecutivo como especialmente relevantes para la seguridad ciudadana y vinculados con la política pública gubernamental de "cero impunidad".¹ De acuerdo con la información recibida, las autoridades presentarían las decisiones tomadas por los magistrados de manera descontextualizada y editorial, sugiriendo que habrían tomado las decisiones fuera del marco legal aplicable y con la intención de beneficiar a presuntos delincuentes.

Al parecer, esta práctica se habría vuelto sistemática, con informes de múltiples ocasiones, entre las que se incluyen: 30 de mayo de 2023,² 13 de junio de 2023,³ 27 de junio de 2023,⁴ 11 de julio de 2023,⁵ 25 de julio de 2023,⁶ 8 de agosto de 2023,⁷ 22 de agosto de 2023⁸ y 3 de octubre de 2023.⁹ Los informes indican que la práctica persiste.

Según se informa, el Presidente habría pedido o anunciado públicamente el inicio de investigaciones sobre jueces como parte de sus reiteradas denuncias contra jueces durante La Mañanera, incluso mediante acciones administrativas, penales y disciplinarias, y peticiones de revocación de la inmunidad judicial en aparente represalia por la adopción de resoluciones en casos específicos.

En marzo de 2021, por ejemplo, el Presidente habría pedido al Presidente de la Corte Suprema durante La Mañanera que investigara a un juez federal después de que éste adoptara una decisión que suspendía la validez de una reforma

¹ <https://seguridad.sspc.gob.mx/acciones/7/cero-impunidad>

² Gobierno de México (2023) #ConferenciaPresidente | Martes 30 de mayo de 2023, recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=K-7ZzJNoZqk> el día 05 de octubre de 2023, a partir del minuto 39:24 hasta el minuto 42:46

³ Gobierno de México (2023) #ConferenciaPresidente | Martes 13 de junio de 2023, recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=K-7ZzJNoZqk> el día 05 de octubre de 2023, a partir del minuto 32:45 hasta el minuto 35:31

⁴ Gobierno de México (2023) #ConferenciaPresidente | Martes 27 de junio de 2023, recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=CFG1qqA1H_s el día 05 de octubre de 2023, a partir del minuto 29:32 hasta el minuto 36:46

⁵ Milenio (2023) Conferencia Matutina de AMLO, 11 de julio de 2023, recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=_xdQEIGwSw el día 05 de octubre de 2023, a partir del minuto 25:36 hasta el minuto 30:41

⁶ Gobierno de México (2023) #ConferenciaPresidente | Martes 25 de julio de 2023, recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=BS9Jrg1LIFw> el día 05 de octubre de 2023, a partir del minuto 36:23 hasta el minuto 39:07

⁷ Gobierno de México (2023) #ConferenciaPresidente | Martes 8 de agosto de 2023, recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=t1V8LCg1oOk> el día 05 de octubre de 2023, a partir del minuto 32:13 y hasta el minuto 38:25

⁸ Excélsior TV (2023) Mañanera de López Obrador, 22 de agosto de 2023, recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=krNGs0yqMI>, el día 05 de octubre de 2023, a partir del minuto 24:43 y hasta el minuto 50:07

⁹ Excélsior TV (2023) Mañanera de López Obrador, 3 de octubre de 2023, recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=ugmTGakLw9g> el día 05 de octubre de 2023, a partir del minuto 01:10:04 y hasta el minuto 01:14:53

legal a la ley energética, que constituía una de las prioridades del Presidente.¹⁰

La información sugiere que los ataques a jueces durante La Mañanera buscarían minar la confianza pública en el poder judicial federal. La información indica que estos ataques serían el origen de acoso en línea y amenazas a la integridad personal de varios jueces criticados o etiquetados por el Presidente. Además, la información sugiere que desalentarían a los operadores de justicia a tomar algunos casos, por temor a represalias informales e institucionales, particularmente cuando se percibe que sus resoluciones podrían contradecir a la Procuraduría General de la República.

En la Mañanera del 21 de febrero de 2024, el Presidente habría sugerido que tenía una estrecha relación con un ex magistrado de alto rango. Según la fuente, el Presidente habría declarado que se había puesto en contacto personalmente con el juez de alto rango cuando éste aún estaba en funciones para darle instrucciones sobre casos considerados cruciales. El juez de alto rango habría transmitido estas instrucciones a los jueces que presidían dichos casos. El Presidente añadió que no tenía una relación similar con un alto juez actual y habría comparado las afirmaciones judiciales de independencia con “[una] licencia para robar, o sea, hagan lo que quieran, porque así tiene fuerza al interior del Poder Judicial; o sea, es una relación de componendas y de complicidades, como si se tratara de una mafia.”

*Caso del Juez **Eduardo Alberto Osorio Rosado***

De septiembre de 2022 a agosto de 2023, el juez Osorio Rosado fue señalado en la Mañanera en cuatro ocasiones distintas. Durante estas instancias, el Subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana lo acusó de "favorecer a delincuentes" y, sin proporcionar contexto ni explicar los razonamientos jurídicos detrás de las decisiones del juez, acusó al juez de haber liberado injustamente a ocho detenidos. Estas acusaciones habrían dado lugar a denuncias penales y administrativas contra el juez Osorio Rosado, a su condena pública en periódicos y plataformas de medios sociales, y a acoso y amenazas en línea contra su integridad personal y la de su familia.

El 10 de octubre de 2023, el juez Osorio Rosado presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando preocupaciones por su seguridad personal como resultado de la estigmatización que sufrió por parte del ejecutivo. La medida se encuentra en revisión y se espera un pronunciamiento del organismo regional en el corto plazo.

El 25 de octubre de 2023, el juez Osorio Rosado recibió un oficio de las autoridades mexicanas en el que se le notificaba la reducción de las medidas de seguridad que le habían sido otorgadas. Los informes indican que la decisión se tomó sin motivación ni justificación y sin estar precedida de ningún análisis de evaluación de riesgos que justificara la reducción de las medidas.

¹⁰ López Obrador desafía al Poder Judicial y pide investigar al juez que frenó la reforma eléctrica, El País (March 15, 2021) <https://elpais.com/mexico/2021-03-15/lopez-obrador-desafia-al-poder-judicial-y-pide-investigar-al-juez-que-freno-la-reforma-electrica.html>.

El 29 de enero de 2024, el Juez Osario Rosado recibió otro oficio de las autoridades mexicanas, notificándole que se le retiraban las medidas de seguridad que le habían sido otorgadas. Esta decisión fue tomada sin que el Juez Osario Rosado fuera escuchado ni se le diera posibilidad alguna de intervenir en el procedimiento. A la fecha, aún no hay mayores avances en la investigación ministerial sobre las amenazas que ha recibido por parte de grupos criminales.

*Caso del Juez **Roberto Antonio Domínguez Muñoz***

El 25 de julio de 2023, el Subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana se refirió al juez Roberto Antonio Domínguez Muñoz como un juez "que favorece a los delincuentes" en La Mañanera, y lo acusó de haber modificado a su favor la naturaleza de las medidas cautelares impuestas a dos personas acusadas de secuestro. Los informes indican que esta acusación carecía de fundamento, ya que el juez Domínguez Muñoz no llevó a cabo la supuesta reducción porque la facultad de modificar unilateralmente las medidas cautelares, o de dar instrucciones para hacerlo, no es de su competencia.

Los comentarios relativos al juez Domínguez Muñoz se amplificaron en Internet, presentándolo como "jueces poblanos que favorecen a delincuentes".¹¹ Los informes indican que estas alegaciones que denigran la reputación y la autoridad judicial del Juez Domínguez Muñoz contribuyeron a crear una falsa percepción de que el Poder Judicial Federal carece de personas comprometidas, leales y honestas. Además, la fuente indicó que esta imagen negativa ha tenido un impacto significativo en el bienestar personal y profesional del Juez Domínguez Muñoz, causando estrés y ansiedad, y potencialmente poniendo en peligro su seguridad y la seguridad de su familia.

*Caso del Juez **Samuel Ventura Ramos***

El 14 de septiembre de 2019, el juez Samuel Ventura Ramos ordenó la liberación de 24 acusados que estaban bajo investigación por delincuencia organizada y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela "Raúl Isidro Burgos" en Ayotzinapa, citando pruebas insuficientes para procesar a estas personas.

Según los informes, la decisión del tribunal siguió la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de México. Se justificó por la exclusión de varias pruebas obtenidas mediante violaciones de derechos fundamentales, como la libertad personal, el derecho a una pronta comparecencia ante un fiscal y la integridad personal del acusado, los coacusados y los testigos. El resto de las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron consideradas insuficientes para sustentar la acusación de delincuencia organizada.

¹¹ Ramos, J. (2023, July 26). FGE respalda a Rodríguez Bucio: jueces poblanos favorecen a delincuentes | e-consulta.com. E-consulta Puebla | Referencia Obligada. <https://www.e-consulta.com/nota/2023-07-25/seguridad/fge-respalda-rodriguez-bucio-jueces-poblanos-favorecen-delinquentes>

El 15 de septiembre de 2019, el gobierno criticó esta decisión judicial durante una conferencia de prensa, alegando que era un caso de corrupción, con el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración declarando: “El juez interpreta con mucha laxitud la ley pero no imparte justicia, y causa graves daños a la búsqueda de la verdad, y esto representa de nueva cuenta las viejas inercias de corrupción, incapacidad y parcialidad del régimen anterior”.¹² Estas acusaciones dieron lugar a una condena pública generalizada dirigida al juez Samuel Ventura Ramos.

El 13 de septiembre de 2022, el juez Ventura Ramos absolvió a 20 personas acusadas de delincuencia organizada y secuestro cometidos contra alumnos de la escuela "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa. El tribunal consideró que las pruebas eran insuficientes para probar los delitos imputados, ya que muchas de ellas no guardaban relación con las acusaciones específicas.

En la Mañanera del 22 de septiembre de 2022, el Presidente criticó al juez Ventura Ramos por sus decisiones sobre el caso Ayotzinapa y cuestionó su legitimidad, preguntando “¿quién lo nombró? ¿por qué el caso de Ayotzinapa, que tiene que ver con Guerrero, lo atiende un juez en Tamaulipas? Pero en la frontera que, además, vive en Estados Unidos según información que se tiene, que hay que comprobar”.¹³ El Presidente también anunció su intención de presentar una denuncia penal contra el juez Samuel Ventura Ramos por sus decisiones judiciales en ambos casos.

*Caso de la Jueza **Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez***

El 30 de mayo de 2023, el Subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana criticó durante La Mañanera a la juez Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, alegando que aplicó la ley de manera parcial para beneficiar a cuatro imputados por la desaparición forzada de una persona.¹⁴

Durante La Mañanera del 5 de septiembre de 2023, el Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana volvió a criticar a la juez Álvarez Rodríguez, sugiriendo que había adoptado decisiones destinadas a beneficiar a delincuentes.

Estas acusaciones fueron ampliamente difundidas en los periódicos, exponiéndola a un supuesto duro escrutinio y condena pública.¹⁵

¹² Acevedo, C. Á. (2023, mayo 18). Juez deja libres a otros 24 detenidos por Ayotzinapa; PJF está “podrido” y encubre a torturadores: Encinas - Semanario ZETA. Semanario ZETA. <https://zetatijuana.com/2019/09/juez-deja-libres-a-otros-24-detenidos-por-ayotzinapa-pjf-esta-podrido-y-encubre-a-torturadores-encinas/>

¹³ Montesinos, C. (2022, September 23). “Este juez es el Estado”: AMLO critica accionar de juez Ventura en caso Ayotzinapa. Reporte Indigo. <https://www.reporteindigo.com/reporte/este-juez-es-el-estado-amlo-critica-accionar-de-juez-ventura-en-caso-ayotzinapa/>

¹⁴ Del Centro, A. E. | E. S. (2023, mayo 30). Exhiben a jueza por caso del pepenador desaparecido en 2018. El Sol Del Centro | Noticias Locales, Policiacas, Sobre México, Aguascalientes Y El Mundo. <https://www.elsoldelcentro.com.mx/local/exhiben-a-jueza-por-caso-del-pepenador-desaparecido-en-2018-10143639.html>

¹⁵ Del Centro, A. E. | E. S. (2023, septiembre 6). Vuelven a exhibir a jueza del estado. El Sol Del Centro | Noticias Locales, Policiacas, Sobre México, Aguascalientes Y El Mundo. <https://www.elsoldelcentro.com.mx/mexico/justicia/vuelven-a-exhibir-a-jueza-del-estado-10649577.html>

Caso de la Jueza Yolanda Cecilia Chávez Montelongo

El 18 de noviembre de 2022, la jueza Yolanda Cecilia Chávez Montelongo dictó sentencia absolutoria en causa penal, alegando insuficiencia de pruebas para establecer la responsabilidad del acusado durante el periodo relevante. Esta decisión fue apelada por el Ministerio Público el 30 de noviembre de 2022.

El 24 de noviembre de 2022 y el 26 de enero de 2023, la Juez Chávez Montelongo fue mencionada por el Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante La Mañanera como uno de los cuatro jueces que habían liberado a los principales sospechosos, sugiriendo que esta decisión era injustificada. Esto generó artículos periodísticos a través de varios medios de comunicación, que al parecer instigaron ataques en línea contra su carácter.

El 25 de enero de 2023, el Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentó una queja contra la Juez Chávez Montelongo ante el Secretario Ejecutivo de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. La queja fue desechada por improcedente, y la improcedencia de la queja fue confirmada en apelación el 2 de marzo de 2023.

La Magistrada Chávez Montelongo también se encuentra actualmente bajo investigación ante la Unidad de Investigación y Litigación en la Ciudad de México.

Caso de la Magistrada Soyla Rosa Cárdenas Bahena

El 4 de septiembre de 2023, la Subsecretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana denunció en La Mañanera que la juez Cárdenas Bahena adoptaba resoluciones que beneficiaban a delincuentes y obstruían la labor de los policías. De acuerdo con la información reportada, las declaraciones en contra de la juez Cárdenas Bahena no reflejaban fielmente la realidad de los procedimientos relacionados con estas resoluciones e incluían insinuaciones de que la juez estaba actuando de manera inapropiada.

Los días 5 y 6 de septiembre de 2023, la juez Cárdenas Bahena fue objeto de numerosos artículos periodísticos, en los que aparecían titulares como “Desde Palacio Nacional, acusan a jueza de Hidalgo por “liberar” a 43 presuntos criminales”.¹⁶ Estas acusaciones instigaron el acoso en línea contra su persona.

Sin pretender prejuzgar sobre la veracidad de estas denuncias, expreso mi seria preocupación por el presunto uso abusivo de los canales gubernamentales de comunicación masiva por parte del Ejecutivo para estigmatizar y calificar a los operadores de justicia como corruptos o delincuentes, en un contexto en el que las consecuencias de tales declaraciones incluirán previsiblemente hostigamiento y abuso dirigidos a influir en la toma de decisiones judiciales. De confirmarse, los hechos

¹⁶ González, B. R. (2023, September 5). Desde Palacio Nacional, acusan a jueza de Hidalgo por “liberar” a 43 presuntos criminales. Noticias De Hidalgo En Periódico Central. <https://hidalgo.periodicocentral.mx/pagina-negra/desde-palacio-nacional-acusan-a-jueza-de-hidalgo-por-liberar-a-43-presuntos-criminales/12766/#ixzz8ClRvxtE>

descritos podrían constituir una violación a diversos estándares internacionales vinculantes para México.

Específicamente, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, y el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen que los Estados deben garantizar que quienes ejerzan una función judicial estén libres de injerencias, intimidaciones, obstáculos u hostigamientos. Un principio fundamental de la independencia judicial es que los jueces no deben ser objeto de amenazas ni correr el riesgo de sufrir daños debido a su trabajo o al contenido de sus decisiones y sentencias independientes.

Además, el etiquetado público de jueces nombrados como "corruptos" o "criminales" a raíz de decisiones tomadas en el curso normal de sus funciones por los funcionarios ejecutivos de alto rango, incluido el Presidente, es especialmente preocupante, ya que se lleva a cabo por funcionarios influyentes de alto rango que ejercen una influencia significativa sobre la percepción pública del poder judicial. En 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso *Apitz Barbera y otros vs. Venezuela*, recordó que al hacer declaraciones de interés público:

“Por lo anterior, no sólo es legítimo, sino que en ciertas ocasiones es un deber de las autoridades estatales pronunciarse sobre cuestiones de interés público. Sin embargo, al hacerlo están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto a constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en atención al alto grado de credibilidad de la que gozan y en aras a evitar que los ciudadanos reciban una versión manipulada de los hechos. Además, deben tener en cuenta que en tanto funcionarios públicos tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden llegar a desconocer dichos derechos. Del mismo modo, los funcionarios públicos, en especial las más altas autoridades de Gobierno, deben ser particularmente cuidadosos en orden a que sus declaraciones públicas no constituyan una forma de injerencia o presión lesiva de la independencia judicial o puedan inducir o sugerir acciones por parte de otras autoridades que vulneren la independencia o afecten la libertad del juzgador.”¹⁷

Asimismo, quisiera subrayar que es responsabilidad del Estado mexicano garantizar la protección de jueces y magistrados para que puedan desempeñar su labor con seguridad.¹⁸ Las autoridades ejecutivas del país deben garantizar que los organismos que brindan seguridad cuenten con personal y recursos suficientes, y deben abstenerse de retirar las medidas de seguridad otorgadas a los operadores de justicia. Dado el riesgo manifiesto que jueces señalados públicamente puedan sufrir ataques y acoso, la interferencia en la seguridad judicial aumentaría significativamente el peligro al que se enfrentan. Esto es aún más grave para aquellos jueces que han recibido amenazas de grupos criminales.

Por último, me preocupan los informes que indican que el ejecutivo ha estado criticando las decisiones de los operadores de justicia basándose en interpretaciones

¹⁷ I/A Court. H.R., Case of *Apitz Barbera et al. ("First Court of Administrative Disputes") v. Venezuela*. Preliminary Objection, Merits, Reparations and Costs. Judgment of August 5, 2008. Series C No. 182, para. 131.

¹⁸ CIDH condena asesinato de jueza en Honduras, 30 de julio de 2013, disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/055.asp>.

falsas o descontextualizadas de las leyes pertinentes, que podrían ser fácilmente verificadas por el ejecutivo antes de pronunciarse. Como ha señalado el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión “Los Estados son los principales responsables de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos. En consonancia con su obligación de respetar los derechos humanos, los Estados no deberían realizar, patrocinar, fomentar o difundir afirmaciones que sepan o deberían saber razonablemente que son falsas [...]” (A/HRC/47/25, párr. 88.) De acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, la difusión por el ejecutivo de información engañosa o inexacta sobre los actos y decisiones oficiales de un juez, que podría ser fácilmente verificada y corregida, equivale a una injerencia en la independencia judicial.

En relación con las alegaciones arriba mencionadas, sírvase encontrar adjunto el **Anexo de referencias al derecho internacional de los derechos humanos** el cual resume los instrumentos y principios internacionales pertinentes.

Es mi responsabilidad, de acuerdo con el mandato que me ha sido otorgado por el Consejo de Derechos Humanos, intentar clarificar las alegaciones llevadas a mi atención. En este sentido, estaría muy agradecida de tener su cooperación y sus observaciones sobre los asuntos siguientes:

1. Por favor, facilite cualquier información adicional y/o comentario que puede tener sobre las alegaciones mencionadas.
2. Sírvase proporcionar información sobre la situación de los jueces que fueron víctimas de ataques verbales por parte del Presidente y otros funcionarios u órganos del poder ejecutivo.
3. Sírvase proporcionar información sobre las salvaguardias adoptadas por la oficina del Presidente para garantizar que las afirmaciones fácticas y jurídicas realizadas durante La Mañanera sean exactas.
4. Sírvase indicar las medidas adoptadas para garantizar la independencia de los jueces y operadores de justicia en todo el país, de conformidad con los estándares internacionales y regionales aplicables.
5. Sírvase indicar las medidas adoptadas para garantizar que la libertad de expresión sea ejercida por las autoridades de manera compatible con la salvaguarda de los derechos y la reputación de los operadores de justicia.

Agradecería recibir una respuesta en un plazo de 60 días. Transcurrido este plazo, esta comunicación y toda respuesta recibida del Gobierno de su Excelencia se harán públicas a través del sitio [web](#) de informes de comunicaciones. También estarán disponibles posteriormente en el informe habitual que se presentará al Consejo de Derechos Humanos.

A la espera de su respuesta, quisiera instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas. Quisiera asimismo instarle a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se

repitan.

Podré expresar públicamente mis preocupaciones en un futuro cercano, ya que considero que las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata. Además, considero que la opinión pública tiene que ser informada sobre las implicaciones potenciales relacionadas con las alegaciones arriba mencionadas. El comunicado de prensa indicará que he estado en contacto con el Gobierno de Su Excelencia para aclarar las cuestiones relevantes.

Acepte, Excelencia, la expresión de mi más distinguida consideración.

Margaret Satterthwaite
Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados

Anexo

Referencias al derecho internacional de los derechos humanos

En relación con las alegaciones, quisiera llamar la atención del Gobierno de Su Excelencia sobre las normas fundamentales contenidas en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), al que los Estados Unidos Mexicanos se adhirieron el 23 de marzo de 1981, y que consagra el principio de igualdad ante la ley y el derecho de toda persona a acceder a un tribunal competente, independiente e imparcial.

El párrafo 1 del artículo 14 del PIDCP consagra los requisitos de independencia e imparcialidad del poder judicial. El requisito de independencia abarca tanto la independencia institucional como la individual. La noción de independencia institucional del poder judicial se establece en la segunda frase del Principio 1 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura, adoptados por las Naciones Unidas en 1990, donde se garantiza el deber de todas las instituciones de respetar y observar dicha independencia. Esto significa que el poder judicial debe ser independiente de los otros poderes del Estado, a saber, el ejecutivo y el parlamento, que, como todas las demás instituciones del Estado, tienen el deber de respetar y acatar las sentencias y decisiones del poder judicial.

Los Principios Básicos también establecen que “No se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial [...]” (principio 4). A este respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que “El requisito de independencia [...] requiere que los tribunales sean autónomos de otras ramas del gobierno, estén libres de influencias, amenazas o interferencias de cualquier origen o por cualquier razón, y cuenten con otras características necesarias para garantizar el cumplimiento apropiado e independiente de las funciones judiciales, incluidas la estabilidad de un cargo y la capacitación profesional adecuada.”¹⁹

La noción de independencia individual del poder judicial se encuentra en el Principio 2 de los Principios Básicos de la ONU, que establece que “Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo.” En 2004, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU pidió a todos los gobiernos a que respeten y defiendan la independencia de jueces y abogados y, a tal fin, a que adopten medidas legislativas, policiales y de otro tipo eficaces que les permitan desempeñar sus funciones profesionales sin sufrir acoso ni intimidación de ningún tipo.²⁰

Asimismo, en la resolución A/HRC/RES/23/6, párrafo 5, el Consejo de Derechos Humanos explícitamente “Condena todos los actos de violencia, intimidación o represalias contra jueces, fiscales y abogados, y recuerda a los Estados su obligación de respetar la integridad de los jueces, fiscales y abogados y de protegerlos, junto con sus familiares y sus asociados profesionales, contra toda forma

¹⁹ Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, OAS document OEA/Ser.L/V/II.116, Doc. 5 rev. 1 corr., octubre 22 2002, para. 229.

²⁰ Commission on Human Rights Resolution 2004/33, para. 7.

de violencia, amenaza, represalia, intimidación y acoso que puedan sufrir como consecuencia del desempeño de sus funciones, y de enjuiciar tales actos y llevar a los responsables ante la justicia”.

También quisiera referir al gobierno de su Excelencia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la que los Estados Unidos Mexicanos se adhirieron el 24 de marzo de 1981, el artículo 8 también protege el derecho a un juicio justo. El artículo 8.1 de la Convención establece que “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, [...]”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia de 5 de agosto de 2008 en el caso *Apitz Barbera y otros* (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. *Venezuela* estableció que la independencia judicial debe ser garantizada por el Estado “tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. El objetivo de la protección radica en evitar que el Sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación.” (párrafo 55).

En un informe sobre la desinformación y la libertad de opinión y de expresión (A/HRC/47/25), el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión concluyó y recomendó “Los Estados son los principales responsables de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos. En consonancia con su obligación de respetar los derechos humanos, los Estados no deberían realizar, patrocinar, fomentar o difundir afirmaciones que sepan o deberían saber razonablemente que son falsa [...]”

También me gustaría llamar la atención del gobierno de Su Excelencia sobre la Declaración conjunta 2021 sobre líderes políticos, personas que ejercen la función pública y libertad de expresión que establece expresamente “Los partidos políticos deben adoptar y aplicar medidas, como códigos de conducta, que establezcan normas mínimas de comportamiento para sus funcionarios y personas candidatas a cargos electivos, incluso para hacer frente a los discursos que promuevan la intolerancia, la discriminación o el odio, o que constituyan desinformación destinada a limitar la libertad de expresión u otros derechos humanos.” (párrafo 3, i).

Por último, quisiera llamar la atención del Gobierno de Su Excelencia sobre el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantizan a todas las personas el derecho a la vida.

En la observación general nº36, el Comité de Derechos Humanos se pronunció sobre el alcance del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y estableció que el deber de los Estados Parte de proteger el derecho a la vida incluye la obligación de adoptar medidas jurídicas apropiadas para proteger la vida de todas las amenazas previsibles, incluidas las amenazas de particulares y entidades privadas (párrafo 22). Por lo tanto, los Estados Parte tienen la obligación de “intervenir de

manera urgente y eficaz para proteger a las personas que se enfrentan a una amenaza concreta, adoptando medidas especiales como la asignación de protección policial permanente, la emisión de órdenes de alejamiento y de protección contra posibles agresores y, en casos excepcionales y únicamente con el consentimiento libre e informado de la persona amenazada, la custodia precautoria.” (párrafo 23).